

**ORDEN****NÚMERO 1816/2024****CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES****UNIDAD ADMINISTRATIVA:****Expte.: 034/2025****DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de Servicios denominado "*Servicio de acogimiento especializado en familia ajena (2 lotes)*", a propuesta de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, cuya adjudicación se efectuará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características de las prestaciones objeto del contrato de referencia y el importe del contrato.

Uno de los principales derechos de todo niño es poder vivir y desarrollarse en un ambiente familiar adecuado, en condiciones de seguridad y estabilidad. Así queda reflejado en la Constitución Española de 1978, que enumera entre los principios rectores de la política social y económica, la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.

El acogimiento familiar es una alternativa de convivencia no institucional que consiste en la integración de un menor tutelado por la Comunidad de Madrid en una familia que lo acoge como un miembro más de la misma y se compromete a cuidarlo y educarlo, proporcionándole un ambiente adecuado a sus necesidades hasta que se den las circunstancias oportunas para que pueda volver con su propia familia o se determine otra medida de protección más apropiada.

Actualmente, a través de esta vía, cada vez más menores encuentran el entorno afectivo que necesitan en una etapa fundamental para su desarrollo y formación, así como para su plena integración en la sociedad.

A raíz de la modificación de la normativa en materia de protección de menores introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, este impulso del acogimiento familiar se convierte en un imperativo legal para la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, que como órgano responsable en materia de protección de menores de la Comunidad de Madrid, debe dotar de los recursos necesarios para darle cumplimiento.

En materia de acogimiento familiar, esta modificación contempla por primera vez de manera expresa la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial, en especial para los menores de hasta 6 años de edad. El nuevo marco legal impone el ejercicio de las medidas de protección en acogimiento familiar salvo excepciones debidamente justificadas y en todo caso, limita la duración del acogimiento residencial de menores de seis años a un máximo de tres meses.

Con motivo de la modificación introducida en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por parte de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la

violencia, se pone en valor la figura del acogimiento especializado con o sin dedicación exclusiva, percibiendo, en su caso, una compensación. Esta nueva figura es la que se desarrolla en el presente contrato al objeto de dar cumplimiento al imperativo legal de dar prioridad al acogimiento familiar frente al acogimiento residencial en aquellos menores con necesidades o circunstancias especiales.

La entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, actualiza la normativa autonómica madrileña en materia de infancia. En su exposición de motivos, recoge el derecho a crecer en familia de la siguiente manera:

“Se incluye, además, un derecho de «nueva generación»: el derecho al desarrollo y al crecimiento en el seno de una familia. Con algún precedente autonómico, como es la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, la Comunidad de Madrid es de las primeras en afirmarlo y regularlo como un derecho verdaderamente fundamental. Eleva así, a categoría de derecho, el de todo niño a vivir y crecer en familia, recogiendo la afirmación del Preámbulo de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, en el que se señala que «el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión»; y asumiendo que, tal y como afirman la Declaración universal de los Derechos Humanos y otros importantes textos internacionales, «la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado».

Esto supone apostar por un mayor apoyo a las familias y al acogimiento familiar, tal y como recoge la norma:

“Ello va a tener importantes consecuencias en el cambio esencial del modelo del sistema de protección existente hasta el momento, que va a apostar por un apoyo más decidido a las familias, así como una apuesta absoluta por el acogimiento familiar y la adopción como principales figuras de protección.”

La actual normativa autonómica, da un paso más en consonancia con la normativa estatal, regulando en su artículo 94.1 párrafo segundo el acogimiento familiar especializado: *“El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado, entendiéndose por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia o formación específica para desempeñar esta función respecto de niños con necesidades o circunstancias especiales, pudiendo percibir por ello una compensación económica.*

Este acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva, cuando así se determine por la entidad pública de protección de la Comunidad de Madrid, por razón de las necesidades y circunstancias especiales del menor en situación de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona o personas designadas como acogedoras una compensación en atención a dicha dedicación.”

El principio general de la acción protectora de la infancia que consiste en la elección prioritaria del acogimiento familiar respecto del residencial, se encuentra limitado de forma muy importante por la escasez de familias disponibles para **el acogimiento de especial dificultad**, por la falta de profesionalización de las familias acogedoras y por la situación psicológica en los aspectos emocionales, especialmente, de los menores que podrían ser acogidos y a la vez, falta transmitir una información detallada y veraz de lo que supone un acogimiento familiar **para evitar un fracaso de la convivencia, que implicaría el traumático cese del acogimiento y el reingreso del menor en un nuevo recurso residencial.**

El coste de un centro específico alcanza los 283,24 €/plaza/día mientras que el coste por menor en un hogar familiar y retribuyendo la especial dedicación supone un importe diario de 105,37 euros, casi un tercio del coste de acogimiento residencial, lo que aparte de ser un ahorro económico, permite la desinstitucionalización del menor y su integración en un núcleo familiar, lo que va a redundar en el bienestar físico y emocional del menor.

Todo ello implica una necesidad aún mayor por parte de la entidad pública de potenciar el acogimiento familiar, lo cual va ligado de manera indisoluble con la atención del acogimiento especializado, dentro del marco estatal de implementación de esta tipología de acogimiento, de forma que se garantice la adecuada protección de los menores.

Por lo tanto, y dado que el equipo técnico del Servicio de Acogimiento de la Dirección General responde a las exigencias técnicas de las distintas modalidades de acogimiento familiar, se añade la necesidad de potenciar aún más el acogimiento familiar para dar cumplimiento del mandato legal y asumir nuevas modalidades de acogimiento como el acogimiento familiar especializado.

La atención al acogimiento especializado conlleva, necesariamente, el desarrollo de actividades específicas por el perfil concreto de las familias acogedoras y por las características concretas de los menores beneficiarios de esta medida de protección, por lo que requiere de recursos materiales y personales que hacen conveniente su tratamiento diferenciado de otras actividades de supervisión y apoyo al proceso de acogida.

En esta línea, resulta necesario contratar un servicio que incluya la difusión, captación y la valoración de familias; la revisión de los niños, niñas y adolescentes que puedan beneficiarse de esta modalidad de acogimiento; la selección de familias idóneas, el seguimiento de los acogimientos especializados, así como la realización de la compensación que corresponda para remunerar las funciones técnicas desempeñadas por los acogedores especializados.

Dentro del marco de la estrategia de desinstitucionalización de la Comunidad de Madrid, es esencial garantizar la continuidad de los acogimientos iniciados a través de los dos proyectos pilotos financiados con fondos MRR por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (actualmente Ministerio de Infancia), que se han desarrollado desde el año 2022 en la Comunidad de Madrid, entre otras Comunidades Autónomas, por parte de dos entidades (ALDEAS SOS y REDES AFE-FICE SPAIN). La formalización de estos nuevos acogimientos especializados ha permitido la atención en un entorno familiar de 6 menores (una de las familias atiende a un grupo de hermanos), que presentan problemas de conducta o discapacidad.

Todo ello justifica la necesidad recurrir a la contratación del servicio de atención al acogimiento familiar especializado, para dar cumplimiento del mandato legal previsto.

Madrid a fecha de firma	<p>LA CONSEJERA DE FAMILIA. JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023) LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD</p> <p>Firmado digitalmente por: VALMAÑA OCHAÍTA SILVIA Fecha: 2024.06.04 15:11</p> <p>Fdo.: Silvia Valmaña Ochaíta</p>
-------------------------	---